

# Educación superior y empleabilidad. Estos son los desafíos a superar

Contar con educación superior no solo representa un logro personal o académico, sino que contribuye al fortalecimiento de uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de un país. Las economías más competitivas del mundo tienen en común un alto porcentaje de población con formación técnica o universitaria, ya que esta condición impulsa la innovación, mejora la productividad y facilita la adaptación a los cambios tecnológicos y sociales.

En el caso del Perú, si bien se han logrado avances importantes en la expansión del acceso a la educación superior, aún persisten desafíos clave relacionados con la culminación de estudios, la inserción laboral, la correspondencia entre formación y ocupación y las condiciones de empleo. Estos temas son fundamentales para entender el verdadero impacto de la educación superior en el desarrollo productivo del país y constituyen el eje central del presente informe elaborado por el **IEDEP**, con base en la información de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH0) 2024.

**LEA TAMBIÉN:** “La educación ocupacional tiene un impacto directo en la competitividad”

## Situación actual de la educación

# superior

Se estima que en el 2024 alrededor de 8 millones de peruanos contaban con algún nivel de educación superior, de los cuales, 4.9 millones tenían educación superior completa y 3.1 millones, educación superior incompleta. Además, más de 360 mil personas accedieron a estudios de posgrado, lo que refleja una creciente valorización social de la formación profesional en el país.

Entre 2021 y 2024, se observa un aumento sostenido del número de personas con educación superior completa, que pasó de 4.14 millones a 4.90 millones, un crecimiento acumulado del 18.4 % (6.3 % promedio anual). Por su parte, la población con educación superior incompleta se incrementó de 2.76 millones a 3.10 millones, es decir, un crecimiento del 12.5 % (3.9 % promedio anual). Estos datos evidencian tanto una expansión de la cobertura educativa como la persistencia de barreras para culminar los estudios.

El principal desafío se concentra en las 3.1 millones de personas que no concluyeron su formación, de las cuales más de 1.4 millones llevan más de dos años sin retomarla, especialmente en el grupo de edad de 30 a 44 años. Esta situación refleja una brecha crítica en la continuidad formativa, con efectos directos en la empleabilidad, el nivel de ingresos y el aprovechamiento del capital humano calificado. Cabe destacar que este grupo probablemente enfrenta restricciones como cargas familiares y responsabilidades económicas que limitan su posibilidad de reincorporarse al sistema educativo bajo esquemas tradicionales.

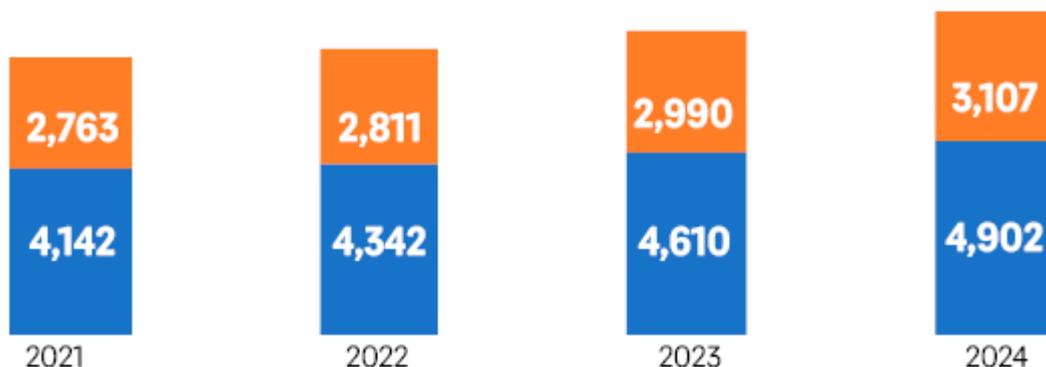


## POBLACIÓN CON EDUCACIÓN SUPERIOR COMPLETA E INCOMPLETA



(Miles de personas)

■ Completa ■ Incompleta



Fuente: ENAHO-INEI

Elaboración: IEDEP

## Brechas entre educación y ocupación

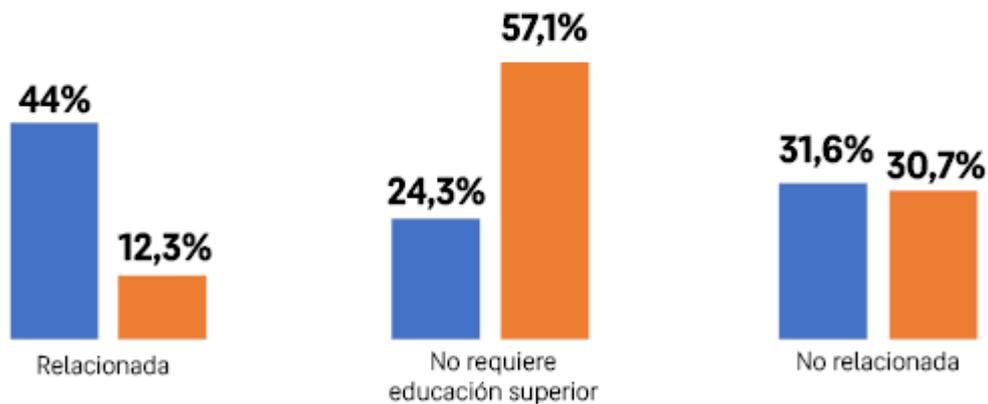
Uno de los hallazgos más relevantes del informe es la desconexión entre el campo de estudios y la ocupación real. Solo el 44% de quienes concluyeron la educación superior trabajan en un empleo vinculado directamente con su formación. Aún más preocupante, el 57.1% de quienes no concluyeron sus estudios se desempeñan en actividades que no requieren ningún tipo de formación profesional.

Las áreas con mayor nivel de coincidencia entre formación y empleo son **Fuerzas Armadas y Policiales** (77.1%) y **Educación** (67.8%). Por el contrario, carreras como **Ciencias Sociales, Ingeniería, Economía o Ciencias Naturales** muestran niveles mucho menores de alineamiento, lo que sugiere la necesidad de revisar los contenidos curriculares, mejorar la orientación vocacional y fortalecer la vinculación universidad–empresa.

## RELACIÓN OCUPACIÓN Y LA FORMACIÓN



■ Completa ■ Incompleta



Fuente: INEI

Elaboración: IEDEP-CCL

## Brechas de género y beneficios de culminar los estudios superiores

El informe también revela diferencias significativas por género tanto en el acceso como en los resultados laborales de la educación superior. En 2024, las mujeres representaron el 62.3 % de quienes concluyeron la educación superior, lo que refleja una participación creciente y sostenida en los espacios formativos. Sin embargo, esta mayor presencia en la formación no se traduce necesariamente en mejores condiciones laborales.

A pesar de contar con mayor nivel educativo, las mujeres siguen enfrentando brechas en el mercado de trabajo. En promedio, los hombres con educación superior completa perciben S/ 2 957 mensuales, mientras que las mujeres con el mismo nivel de estudios ganan S/ 2 306, lo que representa una diferencia de más de S/ 650.

No obstante, el informe también muestra que culminar los

estudios superiores tiene un impacto positivo y claro sobre los ingresos para ambos géneros. Comparando con quienes no completaron su formación, las personas con educación superior terminada ganan, en promedio, casi el doble: S/ 2 666 frente a S/ 1 406. Esta prima salarial por culminación se mantiene consistente en todos los grupos de edad y sectores, reafirmando la importancia de completar la trayectoria educativa como vía concreta para mejorar las condiciones económicas de los hogares.

## **Inserción laboral según actividad económica y tipo de vínculo laboral**

El informe revela diferencias notables en la inserción laboral de las personas con educación superior, dependiendo de si culminaron o no sus estudios. En cuanto a los sectores económicos, la mayoría de quienes completaron su formación superior trabaja en el sector **Servicios** (63.7%), seguido de **Comercio** (16.9%) y **Manufactura** (8.6%). En contraste, hay una redistribución de la población con estudios superiores incompletos, bajando en Servicios (50.2%) e incrementándose en **Comercio** (25.2%) y **Manufactura** (11.4%).

En cuanto al tipo de vínculo laboral, el 71.3% de las personas con educación superior completa se desempeña como trabajador dependiente (asalariado), mientras que esta proporción cae al 60.7% entre quienes no terminaron sus estudios. Además, los trabajadores con educación incompleta muestran una mayor presencia en el empleo independiente (28.4%) y en categorías informales o sin relación contractual clara, lo que evidencia una mayor vulnerabilidad laboral.

# Conclusiones

El avance en el acceso a la educación superior en el Perú es innegable, pero los desafíos estructurales persisten. Aumentar la tasa de culminación debe ser una prioridad, especialmente para los adultos jóvenes que abandonaron sus estudios por razones económicas o familiares. Es fundamental promover alternativas formativas más flexibles, con horarios adaptados y rutas modulares que permitan retomar y concluir la formación superior sin sacrificar otras responsabilidades.

Además, es prioritario mejorar la conexión entre lo que se enseña y lo que el mercado necesita. La baja correspondencia entre formación y empleo sugiere la necesidad de revisar los contenidos curriculares, fortalecer la orientación vocacional e impulsar alianzas entre instituciones educativas y empresas. Finalmente, resulta clave incentivar la inserción en sectores productivos dinámicos y formales, que ofrezcan mejores condiciones laborales y oportunidades de desarrollo. Las carreras técnicas, digitales y orientadas a la innovación deben ser promovidas desde la formación básica.

## LEA MÁS:

Inflación se desacelera en marzo, pero educación y alimentos suben

CCL: “Sectores más beneficiados por OXI son salud, educación y transportes”

Una mirada estructural a la pobreza en el Perú: más allá del ingreso

---

# Bloqueos de carreteras generan pérdidas millonarias

Al cierre de esta edición, el bloqueo de carreteras en nueve tramos de la **Panamericana Sur**, principalmente Ocoña y Chala (**Arequipa**), mantenía paralizado el transporte de carga y pasajeros, generando una situación de caos, incertidumbre y graves pérdidas económicas para el país y diversos sectores productivos.

La protesta ocasiona el varado de más de mil camiones, pérdida de alimentos perecederos y escasez de productos esenciales en mercados locales. Situación que se ha extendido a la capital con enfrentamientos entre mineros informales y agentes del orden.

Los mineros artesanales e informales tomaron esta decisión como medida de protesta al exigir al Gobierno la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), pues conforme con el **Decreto Supremo 0125-2025** se anula más de 50 000 inscripciones.

Como respuesta, el **Ejecutivo** reiteró su posición de no ampliar el Reinfo, pues considera que la minería informal es una actividad que atenta contra el medio ambiente y fomenta economías ilegales como el narcotráfico, el contrabando, entre otros.

**LEA TAMBIÉN:** CCL: bloqueo en el sur pondría en riesgo S/ 622 millones diarios y elevaría la inflación regional

# Pérdidas económicas e inflación

La Cámara de Comercio de Lima (CCL), a través de su **Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP)**, estima que el bloqueo de estas vías estaría generando pérdidas de hasta S/ 622 millones diarios en las regiones de Arequipa, La Libertad, Ica y Cusco, lo que equivale al 20 % del Producto Bruto Interno (PBI) nacional.

El gremio empresarial advierte que las paralizaciones podrían generar un mayor impacto en la inflación (actualmente entorno de 1% en promedio en estas regiones), debido a interrupciones en la cadena de suministros y alzas en precios de alimentos y combustibles.

Precisamente, el cierre de las vías ha impedido el traslado de 120 toneladas de papa hacia Lima, situación que también afecta a otros productos esenciales de consumo diario, como la cebolla, ajos, verduras y hortalizas.

Del mismo modo, existe el riesgo de desabastecimiento de combustibles. Según reportes preliminares, el 80 % de los grifos arequipeños ya no cuenta con gas licuado de petróleo (**GLP**), lo que podría provocar un alza inmediata en los costos de transporte y servicios básicos si el bloqueo se prolonga. Esta situación también está afectando a la región Tacna.

## En riesgo agroexportaciones

Los bloqueos igualmente amenazan el desempeño de las agroexportaciones, principalmente en los envíos de arándanos, uvas, paltas, y espárragos, productos de gran demanda en el mercado internacional.

*“Estos productos dependen de condiciones de frescura y logística rápida, que, de seguir estas paralizaciones, se*

*afectarían contratos internacionales y generaría pérdidas económicas para pequeños y medianos productores”, sostuvo Óscar Chávez, jefe del IEDEP de la CCL.*

Asimismo, se afectaría las actividades de más de 600 000 negocios, mayormente micro y pequeñas empresas (mypes) concentradas principalmente en el sector comercio y servicios.

La industria ganadera también estima graves pérdidas cercanas a los S/ 4,5 millones tras dejar de acopiar 700 000 litros de leche al día. Esta situación afecta a más de 1 500 ganaderos y programas de alimentación escolar. A ello se suma el encarecimiento de alimentos esenciales para el ganado, como la soya y el maíz, cuya escasez ha disparado los precios.

Los gremios de transporte también señalaron que estas paralizaciones vienen generando a su sector pérdidas monetarias ascendentes a S/ 280 millones diarios.

Frente a ese contexto, la **CCL** y otros gremios empresariales han instado al Gobierno a actuar con urgencia y firmeza para restablecer el orden y garantizar la seguridad en las vías nacionales. Con ello, se busca evitar un mayor impacto inflacionario, el desabastecimiento de combustibles y vulneración del derecho al libre tránsito.

## **LEA MÁS:**

Inversión en innovación empresarial subiría al 1% del PBI al 2030

INEI: PBI creció 3,9% en el primer trimestre de 2025

CCL: la inseguridad es el principal obstáculo para la lucha contra la pobreza

---

# Presupuesto público 2026: Más que aumentarlo, hacerlo más eficiente

El próximo mes empezará a debatirse en el Congreso de la República, la ley del presupuesto público para el año 2026 y si bien el primer foco de interés será saber en cuánto se incrementarán los gastos del gobierno el próximo año, diversos economistas consultados por esta revista consideran que lo principal es establecer cómo se mejorará el uso del dinero que los ciudadanos aportan al **Estado Peruano**.

Juan Carlos Odar, director gerente de Phase Consultores, cuestiona que el gasto previsto de las entidades estatales deba incrementarse.

*“El monto del presupuesto ya está en el orden del 22 % al 23 % del PBI, con lo que de partida es alto frente a nuestra recaudación tributaria, lo que origina que permanentemente incurramos en déficit fiscal”,* apunta Odar.

*“En ese sentido, pensaría en mantenerlo estable y empezar a rebajarlo gradualmente, de manera que crezca al que resulte menor entre el incremento del presupuesto y el crecimiento del PBI nominal del año anterior”,* sugiere.

El economista señala que una regla de ese tipo, generará incentivos para que los gobiernos de turno se preocupen por procurar crecimiento económico. *“Si se quiere aumentar la velocidad de generación de recursos para el sector público debe ser interés del gobierno lograr estimular el crecimiento de la producción privada. Fomentar la inversión y el consumo privados terminaría permitiendo una mayor dinámica del gasto*

*público”, plantea.*

**LEA TAMBIÉN:** INEI: PBI creció 3,9% en el primer trimestre de 2025

## **Subirlo, pero con reforma**

Por su parte, Dittmer Quispe, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), sostiene que el presupuesto puede ser incrementado de forma progresiva y responsable, pues en la actualidad está muy por debajo en comparación con países de la **OCDE**. *“Se puede aspirar a elevarlo hasta el 30 % del PBI en el mediano plazo, sin perder sostenibilidad fiscal, siempre que se haga acompañado de una reforma estructural del gasto. Este aumento debe orientarse a inversión pública de alto impacto, especialmente en salud, educación y desarrollo económico local”, sostiene.*

Pero aclara que el condicional señalado es lo más importante. *“Incrementar el presupuesto sin mejorar la calidad del gasto sería ineficiente”, aclara.*

## **Mejorar el gasto subnacional**

Tanto Odar como Quispe coinciden en que uno de los principales problemas en Perú es la baja ejecución y limitada eficiencia del gasto a nivel regional y local; pero sus recomendaciones para impulsar mejoras son distintas y abren el debate.

Según datos del portal de **Transparencia del MEF**, los gobiernos subnacionales solo ejecutaron el 73 % del presupuesto para inversiones al cierre del 2024, y en muchos municipios

pequeños la ejecución fue menor al 50 %.

Quispe, quien sigue atento el devenir de la economía de Junín y el interior del país, afirma que la baja ejecución de las regiones y municipalidades es por falta de personal calificado, alta rotación técnica, baja planificación, limitada asistencia técnica, fragmentación institucional y debilidades en los sistemas de control y supervisión.

*“Se requiere una estrategia integral de fortalecimiento institucional subnacional. Esto incluye la profesionalización del servicio civil, la creación de unidades ejecutoras técnicas intermunicipales, la promoción de mancomunidades, incentivos por desempeño y control concurrente de la **Contraloría General**”, dice.*

*“También se requiere revisar el modelo de transferencias intergubernamentales, priorizando criterios de impacto y resultados, no solo población o presión política. Además, urge modernizar la recaudación tributaria nacional y subnacional, diversificando fuentes sin afectar a las microempresas ni a los contribuyentes formales”, agrega.*

## **Reasignación**

Para Odar, si tuviera el poder de disponer del presupuesto público, obligaría al mejor uso de los recursos: “La única reasignación que plantearía va justo en dirección contraria a lo que se ha hecho recientemente elevando el **Foncomun**: le daría menos a los gobiernos subnacionales”, plantea.

Pero aclara: *“No necesariamente reducirles el presupuesto, sino que tengan menos libertad para ejecutarlo, volviendo a centralizar funciones en el gobierno nacional. Entre esa reversión y corregir que la única métrica de evaluación de gestión sea el porcentaje de ejecución del presupuesto, ya hay*

*bastante por cambiar”.*

Actualmente, con los cambios aprobados en el Congreso, los gobiernos locales -que típicamente tienen mayores problemas de gestión que el gobierno nacional- paulatinamente van a disponer de mayor cantidad de recursos, lo que tendería a acentuar las ineficiencias actuales.

Odar dice en líneas generales, que está bien que la asignación del presupuesto esté orientada a educación y salud, que son dos componentes claves para mejorar la productividad y apuntar a lograr un crecimiento sostenido a mayor ritmo; pero insiste en que hay que corregir la ineficiencia.

*“Buscaría implementar mecanismos de evaluación del gasto público orientados a evaluar el cierre de brechas, a cubrir las carencias de infraestructura priorizando enfoques regionales y a maximizar la cantidad de personas beneficiadas con el gasto realizado. Me centraría en buscar ganancias de eficiencia, pues gran parte del gasto social se queda en la parte administrativa y no llega a los usuarios finales, como ocurre por ejemplo en salud”, explica.*

## **Educación y salud**

Quispe coincide en la necesidad de mejorar drásticamente la eficiencia del gasto y de orientarlo a fortalecer el capital humano, reducir las brechas territoriales y promover un desarrollo productivo sostenible e inclusivo.

Si pudiera reasignar el presupuesto público, el economista de **REDES**, manifiesta que plantearía un 22 % para el sector educación, con énfasis en calidad docente, infraestructura educativa y conectividad digital.

*“Para salud, propondría elevar el presupuesto a 18 %, priorizando el fortalecimiento del primer nivel de atención y*

*la salud mental”.*

En seguridad ciudadana y justicia, propondría 9 %, con enfoque en prevención, patrullaje integrado y modernización del sistema judicial, detalla; y el sector infraestructura y conectividad debería recibir un 15 %, dirigido a caminos rurales, agua, saneamiento y digitalización en regiones.

Asimismo, destinaría 8 % al desarrollo productivo (especialmente en agricultura familiar, innovación, ciencia y MYPES), otro 8 % a protección social con enfoque territorial, y 6 % al fortalecimiento institucional, lucha contra la corrupción y mejora de la gobernabilidad local. *“Finalmente, asignaría 3 % a gestión ambiental y cambio climático, 5 % a defensa nacional y relaciones exteriores, y 6 % como reserva de contingencia”.*

#### **LEA MÁS:**

Inversión en innovación empresarial subiría al 1% del PBI al 2030

BCR eleva proyección del PBI de 3 % a 3,2 %, pero lejos del 4% del MEF

Analistas económicos proyectan un menor crecimiento del PBI en comparación con las estimaciones del MEF